

Emprendedores

Los autónomos, perdidos entre la burocracia y la incertidumbre

Cepyme y ATA denuncian retrasos en las ayudas

Alertan de que muchos quebrarán por la falta de liquidez

EDUARDO LOBILLO
MADRID

Un peluquero sepultado por el papeleo de unas ayudas de las que todavía no ha visto un euro; un pequeño hotelero a punto de declararse en quiebra al no poder acceder a los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial); una pareja de pintores que, aunque su oficio no está incluido formalmente en las actividades suspendidas por el decreto de alarma, no puede trabajar porque pueden coincidir en los espacios comunes con otras personas, y, finalmente, un fisioterapeuta, también habilitado para ejercer, pero sin poder hacerlo por falta de material de protección.

Son solo algunos ejemplos de la situación que atraviesan los autónomos debido al Covid-19. Dos de las organizaciones que los representan, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), coinciden en solicitar un plan de medidas que den certidumbre para afrontar un futuro aún no definido en el que tendrán que acometer inversiones y evitar así quedarse por el camino.

Enrique Arroyo, de 53 años, tiene su peluquería cerrada desde el 14 de marzo. Ha pedido un ERTE para su única empleada y el cese de actividad. También el aplazamiento del alquiler de su local y de su vivienda, además de los impuestos y el IVA. Aún no ha visto un euro en ayudas. Se queja de "muchísima burocracia para no darte nada", y califica de "excesivos y sin sentido" algunos requisitos que le piden para obtener las ayu-

das. "Saben perfectamente cuáles son los sectores que hemos cerrado y que tenemos cero ingresos. ¿Por qué nos obligan entonces a presentar tantísimos papeles y documentos?", cuestiona.

La ausencia de material de protección ha llevado al cierre de muchos centros de fisioterapia. Podían seguir abiertos al ser considerados personal sanitario, pero al no contar con ellos y no tener tampoco claras las condiciones de trabajo, decidieron cerrar. Le ha ocurrido a Alejandro Pedraz. Ahora se plantea reabrir poco a poco, aunque tendrá que invertir en la compra de guantes, mascarillas, geles, etc., y cambiar los protocolos de atención a los pacientes. Pedraz asegura que "en nuestro sector no nos han tenido en cuenta ni nos han ayudado en ningún momento. Nos hemos visto poco amparados", comenta.

La falta de criterios claros también afecta a otros autónomos. Es el caso de Ana Zabaleta, que junto a su marido tiene una empresa dedicada a reformar y pintar viviendas. Esta actividad, y otras como albanilería, fontanería y carpintería, han quedado en un limbo. No están incluidas entre las actividades suspendidas, pero tampoco se pueden realizar porque hay riesgo de contagio con otras personas que trabajan en las zonas comunes de esos inmuebles.

"Estamos en una situación dramática derivada de unos criterios que no son claros y lógicos", denuncia

Hay oficios que, aunque no están prohibidos, en la práctica no se pueden ejercer

Un peluquero califica de "excesivos y sin sentido" algunos requisitos

Zabaleta. Agrupam, la Asociación de Maestros Pintores de Gipuzkoa, se pregunta "si los obreros contagiamos más", y señala a otros colectivos que sí pueden seguir desarrollando su actividad y que también tienen contacto en las zonas comunes, como "mensajeros, mudanzas o repartidores de comida".

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, resume la situación así: "No se han tenido en cuenta las capacidades y recursos reales de la Administración; se han puesto unos procedimientos y criterios que te llevan a un peregrinaje burocrático y además se han ido corrigiendo a golpe de Consejo de Ministros, lo que ha generado muchísima incertidumbre". En su opinión, "las ayudas sí van a llegar, pero tarde, y muchos ni siquiera van a estar ahí cuando lleguen".

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, solicita "flexibilidad interna que ayude a las empresas a hibernar durante esas semanas" en un primer momento. Después añade "liquidez", para hacer frente a esta situación. Ve también muy importante que haya "certidumbre, con un plan cerrado de medidas" que otorguen a las pymes tiempo para adaptarse y evitar el cierre.

Este peligro corre Francisco Javier Martín, propietario de tres hoteles en Granada y la Costa del Sol y con 120 empleados. Tres bancos le han concedido ya créditos ICO por un total de casi 900.000 euros para afrontar los próximos meses. Sin embargo, lo que califica como "uno de tantos errores que está cometiendo el Gobierno" no le permite acceder a ellos.

Una de las condiciones para acceder a la línea es no aparecer en la central de riesgos del Banco de España (Cirbe) al cierre de 2019. Su empresa lo estuvo por una deuda con un servicio de renting que ya pagó. Martín denuncia que esa norma es "injusta" y que debería excluirse a quienes están en el Cirbe en el momento de pedir el préstamo, "no antes".



El peluquero Enrique Arroyo.



La pintora Ana Zabaleta.

Ideas para la vuelta

Cepyme. No sabemos cuándo acabará el período de emergencia ni cuándo se empezará a reabrir poco a poco la actividad económica y la vuelta al trabajo. Para esta segunda fase, la de la desescalada, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pide dos cosas: "Necesitamos, en primer lugar, medidas claras para que las empresas puedan adaptarse rápidamente. Y en segundo lugar, que se garantice el abastecimiento de medidas de protección, es decir, de equipos individuales y de test".

ATA. La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, pone el acento en una batería de medidas que, en su opinión, aún no están disponibles y cuya ausencia deja desprotegidos a un número importante de autónomos. "Esperamos correcciones de algunas de las medidas que hemos detectado, como el que se ha dado de baja por el Covid-19 o las madres que se han reincorporado de una baja en 2020; prolongar la prestación extraordinaria en algunos sectores como los estacionales y extender otros, como los ERTE, en hostelería y turismo.

Gastos. En ATA han calculado lo que un autónomo tipo se puede gastar en pedir las ayudas. Teniendo en cuenta que puede solicitar entre 10 y 15 medidas que han puesto en marcha las diferentes Administraciones, y con un coste de 20 euros que le cobra el gestor por petición, "se le van entre 200 y 300 euros de un presupuesto escaso", precisa Ferrero.